

SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veintidós (22) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

AUTO INTERLOCUTORIO N° 28

(Mediante el cual se revoca Auto que negó decreto de pruebas)

Proceso	: Ordinario de Segunda Instancia
Demandante	: ASTRID YUGEY ALCARAZ ZAPATA
Demandado	: FABRICATO S.A.
Radicado	: 05088 31 05 002 2023 00315 01
Providencia	: Auto resuelve sobre decreto de pruebas
Temas y Subtemas	: Seguridad Social- Apelación contra Auto que niega decreto de prueba, dictamen pericial -.
Decisión	: Revoca decisión de Primera Instancia

En la fecha, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**, conformada por los Magistrados **CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ**, como ponente, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado, que se traduce en la siguiente decisión¹:

¹ De conformidad con lo establecido en la Ley 2213 del 13 de junio de 2022 “...Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del decreto legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones...”, que modificó el trámite en los procesos de la jurisdicción Laboral.

ANTECEDENTES

Pretensiones:

Se declare que la demandante prestó sus servicios personales mediante contrato de trabajo a término indefinido, desde el 1° de septiembre de 2002 hasta el 15 de julio de 2020; se ordene el reintegro al cargo que desempeñaba, con el pago de salarios y prestaciones sociales, indemnización del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, pago de perjuicios morales y daño a la vida en relación, intereses moratorios o indexación, indemnización plena de perjuicios del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, costas procesales.

Hechos relevantes de la demanda:

En relación con el tema objeto de recurso, se afirma que la demandante inició a trabajar para Fabricato S.A. a través de la Cooperativa de Trabajadores, a término indefinido desde septiembre del año 2002, transcurridos ocho años y diez meses fue vinculada en el mismo cargo como *operadora pasa lizos* hasta el 15 de julio de 2020 sin solución de continuidad; el día 3 de junio de 2020 le fue terminado el contrato argumentándose vencimiento de una de las prórrogas y fuerza mayor ante la grave situación causada por la pandemia, contando con diagnóstico *epicondilitis lateral, síndrome del túnel carpiano* de origen laboral, según calificación de AXA Colpatria el 6 de mayo de 2021 donde le asignaron el 27.89% de pérdida de capacidad laboral, estado de salud del cual tenía pleno conocimiento la demandada; **al momento de la desvinculación se encontraba en tratamiento, no había sido calificada la pérdida de capacidad laboral,** pero

sin duda sufre una discapacidad grave.

Efectuadas las diligencias de notificación, traslado y respuesta a la demanda, se convocó a audiencia obligatoria de conciliación, saneamiento, fijación del litigio y decisión de excepciones previas.

Trámite en etapa de decreto de pruebas:

El Juez de Primera Instancia negó el decreto y práctica de la prueba solicitada en respuesta a la demanda por Fabricato S.A., consistente en “...se **ANUNCIA DICTAMEN PERICIAL** que se aportará una vez realizado, el mismo será presentado por el Dr. Juan Enrique Montoya, para que se le otorgue al mismo, el respectivo valor probatorio, allí **calificará origen, % de PCL y Fecha de estructuración**. Será aportado: - Dictamen Pericial, de calificación de Pérdida de Capacidad Laboral y documentos que acreditan la identidad del Perito, títulos profesionales y requisitos legales. El perito se encuentra a disposición para comparecer ante el Despacho, en la forma y fecha que éste lo determine...”.

Explicó el *a quo* que no se indica la razón por la cual no fue aportado con la respuesta a la demanda, existiendo ya una calificación de pérdida de capacidad laboral emitida por la ARL que no fue discutida en el trámite administrativo, llamando la atención sobre la utilidad que tendría para el proceso otro dictamen; si lo que se busca es establecer un grado de pérdida, ello no es fundamental, pues no es un medio necesario a efectos de determinar la condición de discapacidad o incapacidad de la persona, como ha explicado la H. Corte Suprema de Justicia; además que implicaría un gasto de recursos y tiempo, lo que va en contra de la eficacia y economía procesal.

Recurso de Apelación:

La **apoderada de la demandada** sostiene que la ley faculta a Fabricato S.A. para controvertir con otro dictamen, el que fue presentado con la demanda; expone que la utilidad deviene en que una vez fue notificada la demanda se contaba con 10 días para reunir la documental con el fin de rendir ese dictamen, término que resultó insuficiente para allegarlo con la respuesta y en tal sentido, se procedió como establece la Ley, esto es, anunciarlo en el acápite de pruebas, siendo viable su decreto por ser conducente, pertinente, útil y lícito; lo que se busca con ella es demostrar que el origen no es laboral, como se indica en el dictamen presentado y que proviene de la ARL, sino también que el porcentaje es menor, lo que en caso de una eventual condena, disminuiría las pretensiones que debiera asumir la demandada.

Alegatos de conclusión:

El apoderado de **Fabricato S.A.** reiteró lo expuesto al sustentarse el recurso de apelación, agregando que la norma permite el decreto del dictamen solicitado para controvertir el allegado con la demanda, resulta de utilidad para el proceso y para la materialización del derecho sustancial de la sociedad demandada a controvertir las pruebas y presentar las que resulten necesarias, permitiendo esclarecer no solo el origen de las enfermedades sino la pérdida de la capacidad laboral, teniendo en cuenta que **el dictamen de la ARL no contó con el acopio suficiente de pruebas por la no participación de la Compañía**, además, que en los últimos cuatro (4) años antes de su retiro, la demandante no presentó incapacidades, ni recomendaciones médicas que dieran cuenta de su pérdida de capacidad laboral.

Agotado el trámite procesal correspondiente a este tipo de procesos y sin que se aprecie causal alguna de nulidad que invalide la actuación, se procede a resolver el asunto de fondo, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

La competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de Apelación, de conformidad con los artículos 57 de la Ley 2ª de 1984, 15 y 66A del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, respectivamente.

Conflicto Jurídico:

El asunto a dirimir radicar en verificar si hay lugar a revocar la decisión de Primera Instancia; analizándose la procedencia de decretar prueba solicitada en la respuesta a la demanda, consistente en “...*DICTAMEN PERICIAL que se aportará una vez realizado, el mismo será presentado por el Dr. Juan Enrique Montoya, para que se le otorgue al mismo, el respectivo valor probatorio, allí calificará origen, % de PCL y Fecha de estructuración...*”.

Encontrando esta Sala de Decisión Laboral procedente revocar el Auto recurrido; por las siguientes razones:

De conformidad con los artículos 48 y 53 Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificados por la Ley 1149

de 2007, **el Juez como Director del proceso cuenta con facultades para propender que éste se lleve a cabo con todas las ritualidades establecidas, atendiendo a los principios de economía y celeridad**; por tanto, **es admisible y plausible** que más ahora, donde opera la oralidad, existiendo inmediatez en la conducción de las audiencias y práctica directa de las pruebas, **controle que sean conducentes, eficaces, útiles y necesarias; rechazando las inconducentes o superfluas con relación al objeto del pleito**; sin que dicha discrecionalidad lo lleve al otro extremo, de negar el ejercicio del derecho de defensa o el de las cargas probatorias, con libertad; pues recuérdese que no solo conoce del proceso el Juez en Primera Instancia, sino que puede llegar a conocerse por este Tribunal y la misma Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia.

Sobre el tema, establece el artículo 53 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social que “...El juez podrá, en decisión motivada, rechazar la práctica de pruebas y diligencias inconducentes o superfluas en relación con el objeto del pleito...”; de lo cual se extrae que la prueba puede ser rechazada, **motivadamente**, cuando es **inconducente o superflua**, debiéndose entender por la primera de las acepciones, que el hecho no puede demostrarse mediante determinado medio probatorio, lo cual hace referencia al análisis por parte del operador jurídico, de una cuestión de derecho, respecto a la factibilidad de probar determinada circunstancia con el medio probatorio solicitado. **En tanto la prueba superflua**, es la que se torna **innecesaria**, al haberse practicado ya las suficientes para adquirir certeza sobre el hecho.

Sobre el tema objeto de apelación, el artículo 227 del Código General del Proceso, aplicable por remisión analógica del

artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, contempla que la parte que pretenda valerse de un dictamen pericial deberá aportarlo en la respectiva oportunidad para pedir pruebas, precisando que “...Cuando el término previsto sea insuficiente para aportar el dictamen, la parte interesada podrá anunciarlo en el escrito respectivo y deberá aportarlo dentro del término que el juez conceda, que en ningún caso podrá ser inferior a diez (10) días. En este evento el juez hará los requerimientos pertinentes a las partes y terceros que deban colaborar con la práctica de la prueba...”; observándose que la sociedad demandada actuó en el sentido indicado por la norma, cuestionando el *a quo* el hecho de no haberse precisado oportunamente, esto es al contestar la demanda, cuál fue la razón que impidió aportar el dictamen dentro del término de los diez (10) días de traslado para responder.

Más allá de lo anterior, **el Juzgado fundamentó su negativa en el hecho de existir ya un dictamen en el expediente**, aportado con la demanda, en el que aparece calificada la pérdida de capacidad laboral de la señora Alcaraz Zapata, explicando que el estado de discapacidad no necesariamente se demuestra con un dictamen y considerando que decretar uno más no sería de utilidad e iría en contra de los principios de eficacia y economía procesal.

No obstante, también debe tenerse en cuenta que el **artículo 228 del Código General del Proceso** contempla que la parte contra la cual se aduzca un dictamen pericial podrá solicitar la comparecencia del perito a la audiencia, aportar otro o realizar ambas actuaciones; siendo este un medio probatorio invocado por la parte demandada en ejercicio del derecho de contradicción y defensa, máxime que según lo afirmado en los alegatos de

conclusión y se infiere de la prueba obrante en el expediente, la demandada no fue parte en el proceso administrativo adelantado ante la ARL AXA Colpatria para la expedición del dictamen aportado con la demanda, que tiene fecha 27 de octubre de 2022, esto es, dos (2) años después de finalizado el vínculo laboral en julio del año 2020 y así se afirma en el hecho séptimo de la demanda: “...**Al momento de la desvinculación, la demandante, aún se encontraba en tratamiento, no había sido calificada para determinar su porcentaje de pérdida de capacidad laboral...**”. Otro aspecto relevante es que la demandada busca se determine también la fecha de estructuración de la enfermedad que se aduce es de origen laboral, tema que no aparece calificado en la valoración aportada con la demanda y que puede ser de utilidad para resolver el litigio.

Es de anotarse que, según lo dispuesto en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, el Juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas y por lo tanto, formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba, atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito, pudiendo también decretar pruebas de oficio, si así lo considera.

Así las cosas, esta Sala de Decisión Laboral encuentra procedente **revocar** la decisión de Primera Instancia; en su lugar, se ordenará al Juzgado de origen decretar la práctica del dictamen pericial solicitado con la respuesta a la demanda por Fabricato S.A.

COSTAS:

No se condenará en Costas en esta Segunda Instancia al haber prosperado el recurso de apelación formulado; de conformidad con lo establecido en los artículos 365 y 366 del Código General del Proceso y el Acuerdo 10554 de 2016 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, **EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: Se **REVOCA** el Auto de la fecha y procedencia conocidas, que por vía de Apelación se revisa; en su lugar, se ordena al Juzgado de origen decretar la práctica del dictamen pericial solicitado con la respuesta a la demanda por Fabricato S.A.; de conformidad con lo explicado en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: No se condena en **Costas** de Segunda Instancia; según lo indicado en la parte motiva.

TERCERO: Lo resuelto se notifica en **ESTADOS** electrónicos, se ordena devolver el proceso al Despacho de origen y en constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Los Magistrados,



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ

Ponente



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES



VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA LABORAL -
HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por
estados N ° **070 del 25 de abril de 2024**

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/161>